

Buenos Aires, 22 de julio de 1998.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley que "previene y reprime la legitimación de activos provenientes de ilícitos".

Desde el año 1989, en que se sancionara la ley 23.737, por la que se tipificó el delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, se ha desarrollado, a nivel internacional y también nacional, una concientización creciente sobre la naturaleza y alcance de este delito.

La diversidad de formas que adopta este accionar delictivo y su por demás dinámica respuesta a la acción represiva, ha dado lugar a un generalizado consenso sobre las ideas centrales que debe contener la legislación que tienda a prevenir y reprimir este delito.

La primera de esas ideas es precisamente la de prevención. La sociedad en general y el Estado en particular no deben actuar solo en respuesta o reacción frente al hecho delictivo. Deben, en cambio, prevenirlo. De allí surgen las ideas de definir un nuevo sistema de prevención y control que consiste básicamente en establecer una definición de "operación sospechosa"; quienes tienen obligatoriamente que informarlas y cómo es la organización estatal capaz de analizar y procesar dicha información.

También ha ganado amplio consenso la necesidad de ampliar la tipificación del delito de "lavado de dinero" a otros ilícitos de similar o igual repercusión social que el de la producción, tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes (terrorismo, tráfico ilícito de precursores químicos, de seres humanos, de órganos humanos, defraudación en perjuicio de una administración pública, extorsión y secuestro extorsivo).

Es preciso señalar que la gravedad de los ilícitos en cuestión está caracterizada por su inusual capacidad para afectar bienes jurídicos cuya titularidad trasciende los límites de cualquier Estado en particular e incumbe a la comunidad internacional. Por ese motivo resulta indispensable prever medios adecuados que permitan afrontar semejante fenómeno criminal desde una perspectiva realista. En este sentido es un deber de cada Estado adoptar aquellos instrumentos que son conside-

rados internacionalmente como eficaces, aunque ello implique aceptar una injerencia estatal en las actividades lícitas de los ciudadanos hasta el último límite admisible constitucionalmente.

Es en este marco que el Poder Ejecutivo nacional, en el mes de septiembre de 1996, remitió al Poder Legislativo nacional un proyecto de ley que incorpora estas ideas centrales. El tratamiento de este proyecto en las sesiones extraordinarias correspondientes a los períodos ordinarios que finalizaron en diciembre de 1996 y 1997 respectivamente fue dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional mediante los decretos 1.372/96, 1.493/96 y 102/98.

Las comisiones de Drogadicción, de Justicia y de Legislación Penal de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación han iniciado el debate sobre este proyecto, convocando a las asociaciones representativas de los sectores a ser controlados, tal el caso de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) representativa de la banca nacional, la Asociación de Bancos de la República Argentina (ABRA) representativa de la banca extranjera, al Colegio de Escribanos de la Capital Federal y al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, entre otros.

Como se esperaba los aportes realizados por los sectores involucrados en la aplicación de la ley han sido trascendentes llegándose, incluso, al análisis de propuestas que pueden perfeccionar diversos aspectos del proyecto original.

Asimismo, la capacitación y mayor experiencia de los funcionarios técnicos encargados de la elaboración de la norma también favoreció a este debate aportando ideas y mayor perfeccionamiento en la redacción de las mismas.

Como consecuencia de ese proceso de interacción se llegó a la elaboración de dos dictámenes dentro de las mencionadas comisiones, uno de mayoría y otro de minoría.

Ambos proyectos no poseen diferencias sustanciales, respetando la ampliación de la tipificación del delito, las mismas obligaciones y los mismos sujetos obligados a informar. Difiere únicamente en lo referente a la dependencia del organismo de control.

En función de lograr una alternativa que adopte las inquietudes y aportes de las propuestas planteadas por ambos dictámenes, el Poder Ejecutivo nacional eleva a ese Honorable Congreso de la Nación una opción que, en el caso de ser sancionada, constituirá el marco jurídico necesario para prevenir y sancionar la legitimación de activos provenientes de ilícitos, por lo que se considera que vuestra honorabilidad habrá de dar curso favorable al mismo.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 855

CARLOS S. MENEM.

Jorge A. Rodríguez. — Raúl E. Granillo
Ocampo.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

LEY QUE PREVIENE Y REPRIME LA LEGITIMACION DE ACTIVOS PROVENIENTES DE ILÍCITOS

CAPÍTULO I

Delitos y sanciones

Artículo 1º — Será reprimido con reclusión o prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces el monto de la operación, el que tuviere, usare, dispusiere o administrare dinero, recursos o bienes procedentes de ilícitos relacionados con el terrorismo en los términos del artículo 210 bis del Código Penal, con la producción, tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes y precursores químicos, con el tráfico ilícito de armas, tráfico de seres humanos, tráfico de órganos humano, defraudación en perjuicio de una administración pública, extorsión, secuestro extorsivo y los contemplados en los capítulos VI, VII, VIII, IX, IX bis y X del título XI, del Libro Segundo del Código Penal.

Se entenderá que el monto de la operación es el valor real de mercado de los bienes o recursos, según corresponda. Cuando no se pudiere establecer el valor real, la multa será de diez mil pesos (\$ 10.000) a quinientos mil pesos (\$ 500.000).

Art. 2º — La responsabilidad penal por los delitos previstos en este capítulo alcanzará a quienes obren legal o voluntariamente por otro; trátase éste de una persona física o jurídica, o de cualquier ente, asociación u organización pública o privada, con o sin personalidad jurídica, cualesquiera sean sus formas de constitución y funcionamiento. En todos los supuestos la responsabilidad existirá aun cuando el acto que sirve de fundamento a la representación sea ineficaz o cuando ésta sea ejercida de hecho.

Art. 3º — El que sin causa justificada omitiere informar actos o actividades sospechosas, estando obligado a ello, será reprimido con reclusión o prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de diez (10) a cincuenta (50) veces el monto de la operación sospechada, siempre que el hecho no importe un delito más grave.

Las personas jurídicas obligadas a informar actos o actividades sospechosas que omitan dicho cometido sin causa justificada serán sancionadas con multa de diez (10) a cincuenta (50) veces el monto de la operación sospechada.

El que por negligencia o impericia en su arte o profesión omitiere informar actos o actividades sospechosas, estando obligado a ello, será reprimido con multa de dos (2) a diez (10) veces el monto de la operación sospechada.

Se entenderá que el monto de la operación es el valor real de mercado de los bienes o recursos, según corresponda. Cuando no se pudiere establecer el valor real, la multa será de diez mil pesos (\$ 10.000) a quinientos mil pesos (\$ 500.000).

Deber de informar. Sujetos obligados

Art. 8º — Las personas físicas o jurídicas comprendidas en la enumeración del artículo siguiente, están obligadas a informar a la UIF creada por esta ley los actos o actividades sospechosas que adviertan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º.

La reglamentación establecerá las modalidades, oportunidad y límites del cumplimiento de esta obligación para cada categoría de obligado y tipo de actividad.

Art. 9º — Están obligados a informar, en los términos del artículo anterior:

1. Las entidades financieras sujetas al régimen de la ley 21.526.
2. Las entidades sujetas al régimen de la ley 18.924 y las personas físicas o jurídicas que a título profesional o como actividad habitual, operen en la compraventa de divisas bajo forma de dinero o de cheques extendidos en divisas o mediante el uso de tarjetas de crédito o de pago, o en la transmisión de fondos dentro y fuera del territorio nacional.
3. Las personas físicas o jurídicas que a título profesional o como actividad habitual exploren juegos de azar.
4. Los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerentes de fondos comunes de inversión, agentes de mercado abierto electrónico, y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de bolsas de comercio con o sin mercados adheridos.
5. Los agentes intermediarios inscriptos en los mercados de futuros y opciones, cualquiera sea su objeto.
6. Los registros públicos de la propiedad y de comercio y los organismos administrativos de fiscalización o control de personas jurídicas.
7. Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la actividad inmobiliaria, compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática, y a la negociación o elaboración de joyas o bienes con metales o piedras preciosas.
8. Las empresas aseguradoras.
9. Las empresas emisoras de cheques de viajero y emisoras u operadoras de tarjetas de crédito o de compra.
10. Los escribanos matriculados.
11. Los profesionales matriculados cuya actividad está reglamentada por la ley 20.488.
12. Las empresas dedicadas al transporte de cargas y mercancías.
13. Las empresas dedicadas al transporte de caudales.
14. Las empresas prestatarías o concesionarias de servicios postales.
15. Las entidades comprendidas en el artículo 9º de la ley 22.315.

Constituyen actos o actividades sospechosas aquellas de naturaleza civil, comercial o financiera que tengan una magnitud o velocidad de rotación inusual, o condiciones de complejidad inusitadas o injustificadas, o no sean habituales, o se aparten significativamente de los usos y costumbres, o que, por cualquier motivo, parezcan no tener justificación económica u objeto lícito.

Art. 4º — Los funcionarios o empleados de la Unidad de Información Financiera (UIF) creada por esta ley tienen el deber de mantener estrictamente el secreto de las informaciones recibidas y de las tareas desarrolladas.

Los funcionarios o empleados de la Unidad de Información Financiera (UIF) creada por esta ley, las personas físicas o jurídicas obligadas a informar actos o actividades sospechosas y las personas relacionadas profesional o laboralmente a ellas que divulguen informes presentados ante la UIF o las investigaciones realizadas por ésta, serán reprimidos con reclusión o prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de dos (2) a diez (10) veces el monto de la operación sospechada.

Se entenderá que el monto de la operación es el valor real de mercado de los bienes o recursos, según corresponda. Cuando no se pudiera establecer el valor real, la multa será de diez mil pesos (\$ 10.000) a quinientos mil pesos (\$ 500.000).

Art. 5º — Las escalas penales se incrementarán en un tercio del mínimo y del máximo para el funcionario público que, en el ejercicio o en ocasión de sus funciones, participe de los delitos previstos en esta ley.

Con la misma pena serán reprimidos los que utilicen medios o procedimientos tecnológicos, ya sean electrónicos o de cualquier naturaleza, que faciliten la comisión de los delitos previstos en el artículo 1º de la presente ley o dificulten su detección.

Art. 6º — En todos los casos, el producido de la venta o administración de los bienes o instrumentos provenientes de los delitos previstos en esta ley y de los decomisos ordenados en su consecuencia, así como también las ganancias obtenidas ilícitamente y el producido de las multas que en su consecuencia se impongan, serán destinados a financiar el funcionamiento de la UIF, los programas previstos en el artículo 39 de la ley 23.737 y su modificatoria ley 24.424 y los de salud y capacitación laboral, conforme lo establezca la reglamentación pertinente.

El dinero y los otros bienes o recursos secuestrados judicialmente por la comisión de los delitos previstos en esta ley, serán entregados por el tribunal interviniente a un fondo especial que instituirá el Poder Ejecutivo nacional. Dicho fondo podrá administrar los bienes y disponer del dinero conforme a lo establecido precedentemente, siendo responsable de su devolución a quien corresponda cuando así lo dispusiere una resolución judicial firme.

Art. 7º — Esta ley se aplicará aunque el delito o hecho ilícito origen de los recursos, bienes o dinero cuya legitimación se pretenda, se hubiese cometido en el extranjero.

16. Las personas físicas o jurídicas inscriptas en los registros establecidos por el artículo 23, inciso t) del Código Aduanero (ley 22.415 y modificatorias).

17. Los productores, asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros cuyas actividades están regidas por las leyes 20.091; 22.400, sus modificatorias, concordantes y complementarias.

La reglamentación actualizará periódicamente la lista de actividades que generen la obligación de informar.

Art. 10. — Las personas señaladas en el artículo precedente deberán recabar de sus clientes o requirentes, documentos que prueben fehacientemente su identidad, personería jurídica, domicilio y demás datos que en cada caso se estipule, para realizar cualquier tipo de actividad de las que tienen por objeto. Sin embargo, podrá obviarse esta obligación cuando los importes sean inferiores al mínimo que establezca la circular respectiva.

Cuando los clientes o requirentes actúen en representación de terceros, se deberán tomar todos los recaudos necesarios a efectos de obtener la identidad real de la persona o personas por quienes actúen.

Toda esta información deberá archivarse por el término y según las formas que la circular establezca.

CAPÍTULO III

Unidad de Información Financiera

Art. 11. — Créase la Unidad de Información Financiera (UIF) que funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia, gozará de autonomía funcional y actuará en coordinación con el Ministerio Público Fiscal.

Art. 12. — La UIF estará integrada por un directorio compuesto por el secretario de Justicia del Ministerio de Justicia, el secretario de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación, el Presidente del Banco Central de la República Argentina y por un Fiscal General designado por la Procuración General de la Nación.

El directorio será presidido, alternativamente cada doce (12) meses, por cada uno de sus miembros.

La UIF se integrará además con ocho miembros designados por concurso público de oposición y antecedentes, que podrán proponer al directorio los cursos de acción que consideren adecuados.

El directorio designará, entre ellos, un secretario ejecutivo y dos secretarios ejecutivos alternos.

El directorio tendrá como función trazar los lineamientos generales para el desempeño de la UIF.

La UIF tomará sus decisiones por el voto de la mayoría absoluta del total de los miembros del directorio. En caso de igualdad en la votación decidirá el presidente.

Art. 13. — Los miembros de la UIF designados por concurso público de oposición y antecedentes tendrán

dedicación exclusiva en sus tareas, alcanzándole las incompatibilidades fijadas por ley para los funcionarios públicos.

Durarán un período de cuatro (4) años en sus cargos, el que podrá ser renovado en forma indefinida. Deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Poseer título universitario de grado, preferentemente en derecho o disciplinas relacionadas con las ciencias económicas.
2. Poseer antecedentes técnicos y profesionales en la materia.
3. No ejercer en forma simultánea, ni haber ejercido durante el año precedente a su designación las actividades que la reglamentación precise en cada caso, ni tampoco tener interés en ellas.

Art. 14. — La UIF contará con el apoyo de oficiales de enlace designados por los titulares de la Secretaría de Justicia, Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha Contra el Narcotráfico, Banco Central de la República Argentina, Dirección General Impositiva, Administración Nacional de Aduanas, Inspección General de Justicia, Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Podrá solicitar a la Policía Federal Argentina y demás fuerzas de seguridad y a los titulares de los restantes organismos de la Administración Pública Nacional la designación de otros oficiales de enlace.

Art. 15. — La UIF tendrá a su cargo, entre otras funciones, intervenir e instruir las actuaciones a que dieran lugar las disposiciones de esta ley.

Realizará sus tareas en la sede que al efecto se establezca, con los instrumentos técnicos adecuados para acceder a las bases de datos necesarias.

La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha Contra el Narcotráfico deberá mantener, organizar y administrar un banco de datos para el almacenamiento y recuperación de información exclusivamente relativa a actividades de legitimación de activos provenientes del narcotráfico y actividades conexas. A tal efecto será competente para celebrar, con conocimiento de la UIF, acuerdos con organismos nacionales, internacionales y extranjeros en la materia.

Art. 16. — Es competencia de la UIF:

1. Recibir, solicitar y archivar las informaciones a que se refiere el artículo 8º.
2. Disponer y dirigir el análisis de los actos, actividades y operaciones que según lo dispuesto en esta ley puedan configurar legitimación de activos provenientes de ilícitos y, en su caso, poner los elementos de convicción obtenidos a disposición del Ministerio Público para el ejercicio de las acciones pertinentes.

Art. 17. — La UIF está facultada para:

1. Disponer exámenes periciales administrativos, para lo cual podrá requerir a las reparticiones públicas, funcionarios públicos o universidades

nacionales la colaboración necesaria para realizarlos. Cuando sea necesario estará facultada para designar peritos ad hoc.

2. Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que se estime útil, a cualquier organismo público nacional, provincial o municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije, bajo apercibimiento de ley.

Cuando se trate de personas físicas o jurídicas sometidas al control o superintendencia de un organismo público, la información a que se refiere el párrafo anterior deberá requerirse, en primer lugar, al órgano de control respectivo.

No podrá oponerse a la UIF disposición alguna que establezca el secreto de la información requerida.

3. Solicitar del juez federal en turno la orden de allanamiento de lugares públicos o privados, la requisita personal, el secuestro de toda documentación o elementos útiles para la investigación, la interceptación de correspondencia, la intervención de comunicaciones telefónicas y cualquier otro medio electrónico de transferencia de datos, cuando resulte necesario para la investigación. Deberá indicar los motivos de la solicitud y la necesidad de la medida.
4. Ordenar y recibir declaraciones administrativas. También podrá recibir toda manifestación voluntaria, verbal o escrita, de los interesados.
5. Requerir la colaboración de todos los servicios de información del Estado, los que están obligados a prestarla. También podrá requerir a través del juez federal en turno el auxilio de las fuerzas policiales y/o de seguridad.
6. Actuar en cualquier lugar de la República en cumplimiento de las funciones establecidas por esta ley.
7. Solicitar al juez competente la suspensión de la ejecución de cualquier operación o acto informado conforme al artículo 8º, antes de su realización, cuando se investiguen actividades sospechosas.
8. Organizar y administrar archivos y antecedentes relativos a la actividad de la propia UIF o datos obtenidos en el ejercicio de sus funciones para recuperación de información relativa a su misión, pudiendo celebrar acuerdos y contratos con organismos nacionales, internacionales y extranjeros para integrarse en redes informativas de tal carácter.
9. Disponer la implementación de sistemas de control interno para las personas a que se refiere el artículo 9º, en los casos y modalidades que la reglamentación determine.

Art. 18. — La UIF aprobará su reglamento interno y podrá delegar determinadas funciones en los órganos que se creen a tal efecto.

Art. 19. — El Ministerio de Justicia proveerá a la UIF la sede para su funcionamiento.

Art. 20. — La UIF recibirá informaciones, manteniendo en secreto la identidad de los obligados a informar que la suministren. El secreto sobre su identidad cesará cuando se formule denuncia ante el Ministerio Público Fiscal.

Los sujetos de derecho ajenos al sector público y no comprendidos en la obligación de informar contemplada en los artículos 8º, 9º y 10 de esta ley, podrán formular denuncias ante la UIF.

Art. 21. — El cumplimiento de la obligación de informar no generará responsabilidad civil, comercial, laboral, penal, administrativa, ni de ninguna otra especie.

Art. 22. — Cuando de las informaciones aportadas o de las investigaciones dispuestas o dirigidas por la UIF, surgieren elementos de convicción suficientes para sospechar que se ha cometido uno de los delitos previstos en el artículo 1º de la presente ley, serán canalizadas por la UIF según las previsiones del artículo 23.

Las informaciones obtenidas por la UIF sólo podrán ser utilizadas para los fines perseguidos en la presente ley y en el marco de sus incumbencias.

CAPÍTULO IV

El Ministerio Público Fiscal

Art. 23. — El fiscal general designado por la Procuración General de la Nación, de acuerdo a lo previsto en el artículo 12, cumplirá funciones de enlace con la UIF y recibirá las denuncias sobre la posible comisión de los delitos de acción pública previstos en esta ley para su tratamiento de conformidad con las leyes procesales y los reglamentos del Ministerio Público Fiscal.

Los miembros del Ministerio Público Fiscal investigarán las actividades denunciadas o requerirán la actividad jurisdiccional pertinente conforme a las previsiones del Código Penal de la Nación y la Ley Orgánica del Ministerio Público.

CAPÍTULO V

Disposiciones generales

Art. 24. — Será competente la Justicia Federal para atender en los procesos por los delitos previstos en esta ley, y los que resultaren conexos en los términos del artículo 1º.

Art. 25. — En caso de actividades relacionadas con la producción, tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes y precursores químicos, se aplicarán las previsiones de la ley 23.737 y su modificatoria ley 24.424, en cuanto fueran compatibles.

Art. 26. — Deróganse el artículo 25 de la ley 23.737 y su modificatoria ley 24.424, la ley 24.450 y el decreto 1.849/90. La UIF ajustará sus procedimientos e investigaciones a las normas del Código Procesal Penal

de la Nación en cuanto fueran compatibles con las disposiciones contenidas en la presente ley.

Art. 27. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

CARLOS S. MENEM.

Jorge A. Rodríguez. — Raúl E. Granillo
Ocampo.

—A las comisiones de Justicia, de Legislación Penal y de Drogadicción.